

Tuberías de La Mariposa, invisibles y tragadólares



Tiempo de lectura: 14 min.

[Carolina González, Kevin Arteaga](#)

Vie, 23/09/2022 - 19:52

La mañana del 16 de julio de 2014, Jairo Manuel Perdomo experimentó una alegría súbita. En la prensa leyó la noticia: “CAF aprobó 100 millones de dólares para la rehabilitación y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Mariposa y los sistemas de recolección y depuración de aguas servidas de la zona de influencia en la cuenca del Lago de Valencia”. Pensó que se acercaba el fin de la historia del agua fétida y con sedimentos que salía por el grifo de la suya y de miles

de casas en el estado Carabobo.

Aquel anuncio fue el primero de casi 174 millones de dólares que se destinaron entre 2014 y 2017 para el procesamiento de las aguas servidas de Naguanagua, Libertador y parte de Valencia, pero que hoy representan otro monumento al fracaso administrativo del Estado venezolano, pues La Mariposa sigue paralizada.

Los desembolsos, a pesar de haber sido hechos por la Corporación Andina de Fomento (CAF) Banco de Desarrollo de América Latina, no lograron el cometido final de la rehabilitación de la planta, ni contaron con el debido seguimiento, según pudo comprobar una investigación realizada por El Carabobeño y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). En estas indagatorias se puede concluir que así como no se iniciaron las obras en 2014 -pese a la aprobación de los 100 millones de dólares- tampoco lo hicieron en 2017 cuando la CAF anunció otro desembolso de 73.9 millones de dólares para los mismos trabajos.

En 2018 el presidente de la compañía Anónima Hidrológica del Centro, Hidrocentro, para ese momento Miguel Sisco Mora, anunció nuevamente el inicio de la rehabilitación y el 7 de noviembre, en una escueta nota, se informaba la inspección de los trabajos de obras por parte de la ministra Evelyn Vásquez.

En 2022 la planta aún no funciona y Perdomo, un habitante de la urbanización Las Quintas de Naguanagua, sigue recibiendo agua sucia en su casa.

La función de la PTAR La Mariposa es clave para que los carabobeños tengan agua limpia pues funciona como un gran filtro. Inaugurada en 1989, con cuatro módulos o estanques para procesar aguas negras, su función es evitar que las aguas servidas de los municipios Naguanagua, Libertador y parte de Valencia lleguen crudas o sin depurar al embalse Pao-Cachinche, principal fuente de agua potable para los carabobeños, tras ser vertidas en el río Paito.

Si no funciona, como en efecto ocurre, Pao Cachinche recibe las aguas de cloaca sin tratar. A esto se suma que desde el año 2007 el embalse recibe las muy contaminadas aguas del Lago de Valencia mediante un trasvase que intentó, sin éxito, evitar que siguiera aumentando la cota del lago y que se paralizó una década después. Las aguas del lago, cargadas de salinidad y contaminantes orgánicos, volvieron a caer en el Pao Cachinche en 2021, tras ser reactivado el trasvase.

También al Pao Cachinche le llegan las aguas del río Cabriales, que en la década de los 80 desembocaba en el Lago de Valencia y que posteriormente fue desviado hacia el embalse para bajar el nivel de esa cuenca cerrada, igualmente sin éxito. Los contaminantes que aporta no son determinantes, pero suman.

Tanto las aguas del lago, como las del Cabriales y las que no se tratan en La Mariposa han ocasionado que el principal reservorio de agua para consumo de los habitantes de tres municipios carabobeños esté hoy sumamente comprometido.

Esta trama huele mal

Hasta 2002 las reparaciones a los cuatro módulos de la PTAR La Mariposa se habían ejecutado gracias a aportes del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo desembolso y seguimiento a las obras ejecutadas fueron realizadas por la empresa inglesa Halcrow. Poco antes, el 20 de agosto de 2001 entró en escena la CAF y se acordó con el gobierno de Hugo Chávez un proyecto que contemplaba la construcción de ocho nuevos módulos que sería financiado por el organismo internacional.

Pero de esos acuerdos a una obra efectiva pasaron muchos años y a mediados de 2015 la PTAR se paralizó definitivamente, poco después de que la CAF anunciara la aprobación de 100 millones de dólares para ese proceso, desembolso confirmado por el vicepresidente corporativo del organismo en ese momento, José Cabrera.

El contrato fue otorgado al Consorcio Aguas de Tacarigua, creado para la prestación de servicios en las áreas relacionadas con el tratamiento de las aguas, el saneamiento y el medio ambiente, para empresas tanto privadas como públicas, según se pudo leer en su página web, suspendida pero recuperada a través del servicio Wayback Machine, una herramienta de rescate de websites fuera de línea. Según esa información, la fecha de fundación del consorcio se ubicó en algún mes de 2016.

El consorcio es un conglomerado de empresas, no especificadas por la estatal. Sus nombres no aparecen ni en el anuncio de la CAF, ni en la página web de Hidrocentro, que fue el ente encargado de esas labores. Según la página web recuperada, en el equipos de Gestión de Proyectos y Organismos Multilaterales y Sanitaria figura Cristóbal Nicolás Francisco Ortiz, quien ha ocupado diferentes cargos como presidente (e) de Hidroven en el año 2000, viceministro (e) de la Conservación Ambiental (MANR), presidente de Hidroven en 2005, viceministro del Agua del

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en 2007 y ministro del Poder Popular para el Ambiente en 2012.

El miércoles 22 de junio el equipo de El Carabobeño se comunicó con el ingeniero Francisco Ortiz vía telefónica para consultar sobre las labores del consorcio en la PTAR La Mariposa, pero rechazó dar alguna información. A pesar de ser funcionario público alegó que, además de no ser vocero autorizado, él es parte de la inspección de la obra, “y no puedo dar opiniones a la prensa sobre algo que yo estoy inspeccionando”.

El Carabobeño también envió un cuestionario a la oficina del actual presidente de Hidrocentro, Leonel Ruiz, quien tampoco respondió hasta la fecha de publicación de este reportaje.

La explicación negada por el ex ministro la ofreció el ingeniero Rafael Dautant, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Avisa) y miembro del equipo de Sanitaria de Aguas de Tacarigua. “Yo trabajé como asesor para Aguas de Tacarigua, ahí estaban personajes como el ingeniero Cristóbal Francisco, que había sido presidente de Hidroven y ministro del Ambiente, una persona conocedora del agua que goza de mi respeto como profesional. Estaba Huascar Godoy, un geólogo muy prestigioso; y Roque García Ruiz, otro geólogo. Fue una buena experiencia”.

Según la CAF, el contrato otorgado contemplaba el diseño, rehabilitación y ampliación de la planta y su monto era de 100 millones de dólares, pero el ingeniero asegura que el consorcio solo ganó la licitación destinada a hacer la ingeniería, que no es otra cosa que la elaboración de planos y proyectos para la ejecución de la obra y que tiene un costo que no excede el 5% del total de la obra a ejecutar, que en este caso serían 5 millones de dólares. “Yo no tengo acceso a las finanzas de la empresa, pero es imposible que la reingeniería sea más cara que la obra”, dijo en conversación con El Carabobeño.

Dautant trabajó tres años junto al resto del equipo en esa reingeniería y entre sus propuestas estaba no solo quitar la carga orgánica del agua de cloacas, sino eliminar los dos nutrientes más importantes, el nitrógeno y el fósforo, e impulsar el reúso seguro del agua. “Si lo hacíamos nos pondríamos a la vanguardia en el mundo”.

Dautant insiste en que el consorcio sí cumplió lo que les habían encomendado: “Los planos y proyectos se entregaron. Luego se hicieron las bases de licitación para la rehabilitación de la planta, que ganó el consorcio Contemar, con Inclam Venezuela e Inclam España. Allí yo terminé mi labor”.

Huellas en Panamá y Miami

Lucio Herrera Gubaira, director legal de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua (Fmpca), siempre estuvo preocupado por la falta de datos. En 2015, tras la aprobación del contrato a Aguas de Tacarigua, explicó que un consorcio no es ilegal, pero que según la Ley de Contrataciones Públicas está obligado a regirse por principios de honestidad, transparencia y acceso a la información lo que implica que las compañías que lo integran deberían estar especificadas individualmente para poder ser auditadas por cualquier ciudadano.

Pero esto no es así, ni las empresas que conforman el consorcio se conocen, a lo que se suma una segunda irregularidad, pues el consorcio no aparece en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela (RNC), una obligación para ejecutar obras públicas. Tampoco está en la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, pese a que la empresa también está registrada en ese país.

Donde sí aparece activa para contratar es en el registro de Hollywood, en el estado de Florida, Estados Unidos, como Consorcio Aguas de Tacarigua Corp, pero con detalles que llaman la atención. En la base de datos [opencorporates.com](https://www.opencorporates.com) se refleja que la empresa fue constituida en Estados Unidos el 10 de marzo de 2020, cinco años después de la adjudicación del contrato por parte de la CAF. La empresa está en Estados Unidos bajo el número de registro P20000021211 como compañía doméstica con fines de lucro ubicada en 2719 Hollywood Boulevard, Suite A-1849, Hollywood, 33020 y ha estado funcionando durante tres años.

El nombre no es una mera coincidencia y es previsible que se trate de la misma empresa pues en la constitución de la misma figura como presidente, director y secretario Roque García Ruiz, quien también aparece en el organigrama del Consorcio Aguas de Tacarigua de Venezuela, específicamente en los equipos de geotecnia y en el de vialidad. Se trata de un ingeniero geólogo egresado en 1971 de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con experiencia en diseño y supervisión de construcción de túneles y obras hidráulicas.

Más plata para lo mismo

Sin que avanzara ningún proyecto, en 2016 la PTAR estaba desmantelada, producto de la frecuente incursión del hampa que cargó con piezas de aireadores -vitales componentes electromecánicos que disolvían oxígeno en los estanques- el entramado eléctrico y la instalación. También fue arrasada la central de tableros eléctricos, el laboratorio de prueba y hasta la planta eléctrica que hacía funcionar el complejo. Sobre este escenario se impulsó ese mismo año un nuevo llamado a concurso público hecho por Hidrocentro, empresa que otorgó un plazo de 48 meses para culminar los trabajos de rehabilitación de la planta. La CAF aprobó el segundo contrato, esta vez por 73 millones 922 mil 103 dólares con 21.

El Consorcio Contemar fue el beneficiario de este desembolso. Su capital estaba conformado por la empresa española Inclam, S.A. en un 45% e Inclam Venezuela con un 55 %, según lo informó oficialmente la multilateral andina y la propia empresa mediante notas de prensa difundidas en sus sitios web.

Según la nota de prensa de Inclam publicada en noviembre de 2017, en el contrato estaba nuevamente incluida la ingeniería, pese a que ésta había sido ejecutada por Aguas de Tacarigua. “El contrato es para realizar la ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha para la rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales “La Mariposa”, en Valencia, estado de Carabobo (Venezuela). Este contrato por valor de 73.922.103,21 dólares USA está financiado por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y se ejecutará en el plazo de 32 meses. Gracias al excelente desarrollo de los trabajos realizados, HIDROCENTRO revalida su confianza en INCLAM, confirmando a la Compañía como el referente en el país en la ejecución de proyectos de EPC en el sector del agua”.

El Carabobeño intentó, nuevamente sin éxito, obtener la versión del Consorcio Contemar y sus accionistas Inclam Venezuela e Inclam España sobre los trabajos adelantados. No hubo respuesta a los cuestionarios enviados entre marzo y junio de este año para la realización de este reportaje.

Lo único nuevo que ejecutó Inclam, de acuerdo a lo observado por el equipo de El Carabobeño en imágenes captados en la planta el viernes 17 de junio de 2022 y analizadas con especialistas, es un conjunto de galpones, el puesto de la Guardia Nacional Bolivariana que está dentro del terreno de la estructura, el desvío de las aguas que llegan a la planta directamente hacia el río El Paíto y la supuesta limpieza

de los módulos. Según fuentes consultadas, los trabajos están avanzados en no más de un 30 % de lo que establecía el contrato de Inclam, cinco años después de su aprobación.

Las fuentes señalaron que, como argumento de la paralización de las obras, se esgrimieron las sanciones aplicadas por EE.UU. en 2018. Aun así, nadie da cuenta del destino de los casi 174 millones de dólares anunciados, ni siquiera la CAF que no respondió a la docena de solicitudes de entrevista que se canalizaron, tres de ellas vía telefónica, en las oficinas de Caracas. Desde allí fue derivada la comunicación a la sede de la multilateral en Panamá, oficinas a las que se enviaron nueve correos electrónicos, el último el miércoles 22 de junio. En todos los casos la respuesta siempre fue la misma: “Todavía no tenemos respuesta al cuestionario”

Durante 2021 hubo un reinicio de labores, de acuerdo con ingenieros ligados a la planta, pero el equipamiento necesario no había llegado y la obra se paralizó nuevamente. No ha habido información pública sobre un nuevo contrato. Se desconoce si es la continuación del que ganó el consorcio Contemar o se generó un nuevo acuerdo económico.

El ingeniero Rafael Dautant confirmó que en 2021 su equipo fue contratado por Innova Blade Engineering para hacer una caracterización del agua que sale cruda de La Mariposa hacia el Pao Cachinche. El esperable resultado es que tenía características de aguas residuales crudas.

Con este nombre sobre el tapete, el equipo de El Carabobeño logró comprobar en el Registro Nacional de Contratistas que Inclam ya no aparece en sus archivos. En su lugar fue registrada con el mismo RIF, J-314678442, la empresa Innova Blade Engineering.

Una búsqueda avanzada en LinkedIn permitió determinar que especialistas en ingeniería hidráulica y calidad de agua, que trabajaron para la firma de gerencia de proyectos y asesoría en la gestión de empresas de agua potable y soluciones ambientales, llamada Ingenias, presidida por Alejandro Hichter, exministro del Ambiente de 2010 a 2012, y en la que el ingeniero Cristóbal Francisco se desempeñaba como director, aparecían vinculados con Inclam y más recientemente con Innova Blade Engineering. Esto evidencia una correlación de las operaciones, desde el primer contrato aprobado en 2014, a la fecha.

Así inició esta historia

Tras su inauguración en 1989, 10 años después los cuatro módulos de la PTAR se hicieron insuficientes, pues dos de ellos no funcionaban, lo que se sumaba a un crecimiento poblacional considerable. Esto y la necesidad de corregir problemas iniciales de diseño obligaron a un replanteamiento del proyecto. Pero ya no había recursos del BID.

Así, entró en escena la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, un organismo de financiamiento integrado por 19 países. El ente multilateral, en 2001, aportó 20 millones de dólares para la construcción de ocho módulos, en lo que sería la segunda fase de la ampliación de la PTAR que debía ser ejecutada entre 2002 y 2008. En ese momento, el Ministerio del Ambiente era dirigido por Ana Elisa Osorio.

En 2007 la obra no estaba lista. Solo dos, de ocho módulos establecidos en el proyecto, habían sido construidos, según denunció en su oportunidad la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua (Fmpca). La información pública era escasa. El presidente de Hidrocentro, Manuel Fernández, quien ocupó el cargo desde 2010 hasta 2014, nunca respondió a las innumerables solicitudes de entrevistas para abordar el tema en ese momento ni el contacto hecho el 17 de mayo de 2022 para efectos de este trabajo.

Un informe de la Contraloría del Estado Carabobo recopiló evidencias de las irregularidades en la ejecución de trabajos. Este informe elaborado en el año 2010, dio cuenta de la mala calidad del agua de consumo humano, así como de las cuestionables ejecuciones por parte de Hidrocentro y la Unidad Ejecutora del Proyecto de Saneamiento y Control del Nivel de las aguas del Lago de Valencia, a la vez que reconoce la paralización de la PTAR La Mariposa.

En el informe se detalla que, entre el Ministerio del Ambiente e Hidrocentro durante el periodo comprendido entre 1999 y 2009 se destinaron 395 mil 955,07 dólares para proyectos diversos que permitieran la conexión de las aguas servidas a la PTAR La Mariposa y Los Guayos, pero para 2010 sólo se había alcanzado 51 % de esa meta.

En 2015, cuando la paralización de la PTAR era un hecho, el Ministerio para Ecosocialismo y Aguas reconoció que existía un “deterioro manifiesto en las grandes instalaciones pertenecientes al Sistema Regional del Centro I y II, causando variaciones de los caudales, así como mayores demandas de sustancias químicas, altas pérdidas en el proceso de potabilización, daños en los equipos, afectación de la

calidad y altos consumos eléctricos”.

El 15 de diciembre de 2015, el entonces diputado de la Asamblea Nacional (AN), Carlos Lozano, consignó una denuncia ante la fiscalía en contra de Hidrocentro por delitos de lesa humanidad, asegurando que los trabajos asignados a Aguas de Tacarigua no se ejecutaron en La Mariposa. La sustentaron el abandono de la planta depuradora, el desembolso de recursos para rehabilitarla y la mala calidad del agua que se enviaba a los hogares. El fiscal segundo con competencia ambiental en Carabobo, Luis Cordero y los dos nacionales designados para ayudar en la investigación, “de sumo interés para el Estado”, no han presentado el caso, seis años y seis meses después.

En 2016, la planta de tratamiento estaba no solo paralizada, sino totalmente desmantelada. Seis años después la planta solo exhibe unos galpones y contenedores. Eso, el desvío al río El Paíto de las aguas que llegan a La Mariposa y la limpieza de los módulos o estanques para aguas negras fue el aporte del Consorcio Inclam. El de Aguas de Tacarigua, unos planos y proyectos. En esto se invirtieron casi 174 millones de dólares, sin contar los costos de los trabajos ejecutados por Innova Blade Engineering, cuyo contrato es desconocido.

Fueron tres empresas contratadas para rehabilitar la PTAR La Mariposa e incrementar la calidad del agua que llega al embalse Pao Cachinche y la cantidad de líquido que llega a los hogares. Tres directivas con algunos nombres repetidos y un mismo resultado: una planta paralizada.

Aun así, el ingeniero Dautant mantiene la esperanza. “Los dos enemigos del embalse Pao Cachinche son la descarga de agua sin tratar desde la PTAR La Mariposa y el trasvase de aguas del Lago de Valencia, que carece de saneamiento en el trayecto. Si se corrigen estos dos problemas tendremos un embalse Pao Cachinche menos comprometido y se podrá enviar más agua a la planta potabilizadora Alejo Zuloaga. Así tendremos agua no solo de mejor calidad, sino en mayor cantidad.

Mientras tanto, Jairo Manuel Perdomo sigue atento a las noticias.

El Carabobeño

<https://www.el-carabobeno.com/tuberias-de-la-ptar-la-mariposa-invisibles...>

[ver PDF](#)

[Copied to clipboard](#)

